

El COVID 19 y la imposición autoritaria. Una lectura desde Venezuela

Miguel Ángel Latouche R.
Universidad Central de Venezuela
Universität Rostock
migalatouche@gmail.com

La epidemia de COVID 19 en Venezuela ha tenido un carácter moderado, aunque el Sistema de Salud se encuentra con una capacidad operativa baja. El gobierno ha utilizado las medidas de control del virus para materializar sus principales objetivos políticos, a saber: mantenerse en el poder, profundizar la “revolución” y reducir la disidencia. El monitoreo extensivo de las redes sociales, la censura sobre los medios de comunicación y la utilización de las fuerzas militares y policiales para imponer toques de queda y restringir el libre tránsito en todo el territorio nacional, además de encuestas casa por casa”, producen información que es procesada y controlada por el gobierno. Los esfuerzos por limitar la propagación del virus terminan produciendo una reducción sustantiva de las libertades individuales. En los últimos meses la crisis ha servido para apuntalar los mecanismos de control social y garantizar el incremento progresivo de la estabilidad del gobierno y el debilitamiento equivalente de la oposición.

Palabras clave: Covid-19, Venezuela, autoritarismo, control social

The human and economic costs caused by the pandemic are not the same in every nation. For this reason, the article highlights how isolation and difficulty in accessing primary necessities demonstrate social The COVID 19 epidemic in Venezuela has been relatively moderate, despite the diminished capacity of the National Health System. The government has used virus control measures to concretize its main political objectives, which are: stay in power, extend the “revolution,” and reduce dissidence. Extensive monitoring of social networks, censure of communications media, and the utilization of military and police forces to impose curfews and restrict free transit throughout the national territory, in addition to “house-by-house” polling, provide information that is processed and controlled by the government. Efforts to limit the propagation of the virus actually generate a substantive reduction in individual liberties. Over the past few months the crisis has served to shore up social control mechanisms and guarantee a progressive increase in government stability, with a corresponding weakening of the opposition.

Keywords: Venezuela, COVID-19, authoritarianism, social control

En contra de todo pronóstico la epidemia de COVID 19 en Venezuela ha tenido un carácter moderado. Según la data oficial, que es la única disponible, para el 15 de junio de este año, el número de contagios suma 2978 personas, mientras que el de fallecidos ronda apenas los 25, cifra reconocida tanto por la Organización Mundial de la Salud¹ como por la Facultad de Medicina de la Johns Hopkins University en su página web.² Por otra parte, no se ha reportado un número importante de personas muriendo en las calles o de cadáveres siendo abandonados en lugares públicos como ha sido el caso de otros países de la región. En cuanto a números, uno podría decir, aun reconociendo que, tal y como han señalado en un comunicado público los miembros de la Academia Venezolana de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cantidad de pruebas realizadas es insuficiente para estimar el tamaño de la epidemia y admitiendo la posibilidad de un subregistro, no existe evidencia suficiente como para suponer que estemos en presencia de una epidemia generalizada en la población o que esta vaya a producirse en el futuro inmediato.

Se podría llegar al punto de señalar el éxito relativo de las medidas tomadas por el gobierno. Pero habría que acotar que el mismo no está relacionado con el manejo eficiente del Sistema de Salud, el cual, por lo demás, se encuentra más bien desmantelado, pobremente dotado y con una capacidad operativa baja. Debemos señalar que este ha sido sometido, durante años, a la desinversión, la corrupción y la ideologización. Además, la infraestructura hospitalaria, pública y privada, se ha deteriorado y el personal médico-asistencial se encuentra mal pagado o ha migrado masivamente fuera del país. La estrategia venezolana se ha fundamentado en el establecimiento temprano, desde febrero del 2020, de un extenso “cerco epidemiológico”,³ que ha supuesto el incremento sistemático del control gubernamental sobre las actividades públicas y privadas y que ha implicado la imposición de un férreo control social sobre la población en general incluido el monitoreo extensivo de las redes sociales, la censura sobre los medios de comunicación y la utilización de las fuerzas militares y policiales para imponer toques de queda y restringir el libre tránsito en todo el territorio nacional.

El gobierno ha seguido el modelo chino en lo que se refiere al levantamiento y la utilización de *Big Data* para el control de la enfermedad, con las mismas consecuencias autoritarias. A través del Ministerio de Sanidad y con el apoyo de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, los círculos Bolivarianos y otros colectivos se han realizado “encuestas casa por casa” en un número importante de sectores del país. La información es procesada y controlada por la Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Salud y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De manera que el gobierno tiene una visión clara del número de enfermos y la población de riesgo, pero también maneja información pormenorizada y actual sobre la distribución demográfica de la población, características de consumo y capacidad de movilización que le permite adelantar “respuestas rápidas y contundentes”

¹ La OMS reporta para Venezuela: 2904 casos confirmado y 24 muertos, <https://covid19.who.int/>.

² La Johns Hopkins University & Medicine, Coronavirus Resource Center, da estas cifras exactas: 2978 casos y 25 muertos. <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>.

³ “Venezuela refuerza activación de cerco epidemiológico contra el COVID-19”, 29 febrero 2020, Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Salud. <http://www.mpps.gob.ve/index.php/sala-de-prensa/notnac/313-venezuela-refuerza-activacion-de-cerco-epidemiologico-contra-el-covid-19>.

a cualquier intento de protesta o alteración del orden público, aun aquellas referidas a reivindicaciones sociales y demandas que no tienen necesariamente un carácter político.

Se produce, en tal sentido, una paradoja que nos recuerda la “banalización del mal” de Hannah Arendt. En este caso se trata de que los esfuerzos por limitar la propagación del virus terminan produciendo una reducción sustantiva de las libertades individuales, de la capacidad para decidir y del acceso a información que son requisitos básicos de la convivencia democrática. Esto nos habla de al menos dos cosas, (1) del creciente carácter autoritario y no democrático del gobierno venezolano, y (2) de la ausencia de estabilidad política en el contexto de un orden social con un equilibrio muy frágil, el cual es suplido por la Fuerza Armada, actuando como factor de cohesión social, mediante el uso hegemónico de la fuerza. En este contexto debemos considerar que desde el inicio de la crisis sanitaria originada por el COVID 19, la agenda del gobierno estuvo menos orientada hacia la atención de las necesidades sanitarias de la población que en garantizar su permanencia en el poder. Más aun, la crisis referida ha servido para apuntalar los mecanismos de control social y garantizar el incremento progresivo de la estabilidad del gobierno en los últimos meses y el debilitamiento equivalente de la oposición.

La prohibición de la movilización con fines políticos, las restricciones de las reuniones públicas, el control de los medios de comunicación o su salida del aire, las limitaciones crecientes de la libre expresión, el manejo de la escasez con fines políticos y el ataque sistemático hacia los partidos y los políticos de oposición en el contexto de la lucha en contra del COVID 19 ha favorecido el fortalecimiento del gobierno, la construcción de alianzas estratégicas domésticas y externas y la construcción de apoyos basados en la atención populista e interesada de ciertos sectores.

Se ha utilizado un doble discurso con la finalidad de garantizar la monopolización casi total del discurso público. Por una parte, se solicita la comprensión y el apoyo de diferentes sectores para evitar la propagación del virus y por otro lado se acusa a los sectores disidentes de propiciar la propagación de este. Esto último se utiliza a la vez para acusar y perseguir a quienes se consideran “enemigos de la nación”, traidores a la patria, o factores que responden a intereses foráneos. Todo lo cual parece responder a una forma de radicalización del mal como un mecanismo totalitario para la imposición y apuntalamiento del proyecto político chavista. Todo esto ha implicado la reducción de la capacidad política de la oposición, la reducción de los espacios para la disidencia y el aumento del control social, incluido el confinamiento domiciliario a partir del 17 de marzo, que se justifica en la necesidad de evitar la propagación del virus sobre la población.

En tal sentido, no podemos decir que el gobierno haya dejado de atender el problema concreto del COVID 19, en efecto lo ha atendido y ha logrado evitar su propagación. Uno podría suponer que luego de muchos años de ineficiencia y desorden administrativo, el gobierno ha llegado a entender que su propia supervivencia depende de su capacidad para proveer bienes públicos y generar algún grado de bienestar en sectores clave. Desde una perspectiva especulativa podríamos pensar que el gobierno ha comprendido que el problema sanitario referido a la propagación del virus tendría un alto grado de sensibilidad que podría afectar la gobernabilidad y poner fin al llamado “proceso revolucionario”. Esto nos habla de un proceso de aprendizaje en el ejercicio del poder que le agrega

complejidad al juego político venezolano y lo hace, en consecuencia, mucho más peligroso. No en balde en los últimos años se han venido desarrollando una serie de programas sociales que buscan atender de manera directa, y con mayor o menor éxito, las necesidades de los sectores populares. Esto, junto a altos niveles de ideologización del discurso público y el desarrollo de un aparato de inteligencia y contrainteligencia altamente especializado han abonado, al menos por ahora, el aumento de la estabilidad del gobierno autoritario de Nicolás Maduro.

Una mirada objetiva sobre la situación del gobierno venezolano nos lleva a observar una serie de logros alcanzados durante los últimos meses de este año: desmovilización social, criminalización de la protesta, persecución de líderes de la oposición, control de la distribución de combustible, aumento del precio de la gasolina; control sobre los medios de comunicación social, control sobre el sistema financiero, dolarización de la economía, control sobre gobiernos regionales y sobre la distribución de alimentos, sobre el acceso a medicinas para enfermedades crónicas, desmovilización de las universidades, de los sindicatos y de los sectores populares. Todos ellos adelantados en el contexto de la lucha en contra de la propagación del COVID 19.

No quiere esto decir que el gobierno venezolano se encuentre en una situación estable. Sin duda la situación venezolana lleva aparejados altos niveles de incertidumbre susceptibles de afectar el equilibrio regional, pero es claro que el gobierno ha avanzado en establecer su agenda y avanzar en la materialización de sus principales objetivos políticos, a saber: mantenerse en el poder, profundizar la “revolución” y reducir la disidencia. La aparición del nuevo coronavirus ha favorecido la materialización de esos objetivos en detrimento de una población altamente dependiente del gobierno y que cuenta con uno de los peores sistemas de seguridad social de la región.

Miguel Angel Latouche, Profesor Asociado, Universidad Central de Venezuela (UCV), doctor en Ciencias Políticas. Director de la Escuela de Comunicación Social (UCV) 2008–2017. Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Postdoctorales UCV. Ha realizado investigaciones postdoctorales en la Universidad de Bamberg y en el Centro de Estudios Normativos de la Universidad de Frankfurt. Actualmente es investigador invitado del Institut für Politik und Verwaltungswissenschaften de la Universität Rostock, bajo los auspicios de la Phillipö Schwartz Initiative de la Fundación Humboldt.
